

TITULO DE LA PONENCIA

**“El impacto de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género,
de cara a los comicios 2023-2024”**

*“The impact of Law 3 of 3 against gender violence, facing the 2023-
2024 elections”*

Olga Viridiana Maciel Sánchez

Introducción

La presente ponencia tiene como objetivo analizar la Reforma al artículo 38 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023, relativa a la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a personas que: por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa, no pueda ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Siendo relevante, poder analizar el impacto que tendrá esta reforma conocida como “Ley 3 de 3 contra la violencia de género”, de cara a los comicios 2023-2024” y que corresponderá ser observada y aplicada por todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales, máxime cuando dicha reforma tiene una incidencia importante para el cambio de paradigmas asumidos culturalmente por las instituciones y la sociedad.

1. Antecedente histórico de la ciudadanía en México.

En nuestro país la lucha por la ciudadanía ha sido constante, desde el pasado hasta el día de la fecha, dado que ha habido paradas continuas para lograr el reconocimiento de los derechos humanos, civiles y políticos de las mujeres mexicanas, un ejemplo de ello, son las cuotas, el cual ha sido un camino impetuoso y largo, pero que finalmente trajo la paridad en 2014 y en 2019 a lo que se le conoce como “paridad en todo”.

Sin embargo, esos derechos para las mujeres, recrudescieron lo que siempre ha ocurrido en lo privado e invisibilizado en lo público, es decir, la violencia de género, la cual se maximiza al ejercer los derechos político-electorales, y que hoy se le ha reconocido en nuestro país como una modalidad de violencia, y me refiero a la Violencia Política contra las mujeres en Razón de Género (VPCMRG).

Todo esto ha impedido y continúa impidiendo que realmente hablemos de que en nuestro país exista democracia, igualdad y justicia para todas y todos. Debemos reconocer que en la actualidad el principal enemigo del sistema democrático en México es la VPCMRG, conducta que vive en una constante amenaza a la igualdad sustantiva y la justicia social, por lo que de no erradicarse tal conducta, las mujeres seguirán persistiendo bajo este oleaje que las pone en peligro formal, legal y físico, pero no solo a ellas sino al país, ya que tal conducta implica retroceder en el avance de nuestro sistema democrático, así como anular las luchas feministas que lograron que se reconociera el derecho a votar y ser votadas, el derecho a la educación y a la salud entre otros, derechos humanos, civiles y políticos que hoy reconoce nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), por ello, la VPCMRG, no implica solo una lucha que les corresponda a las mujeres sino de todas y todos los mexicanos.

De ahí nace la importancia que se analice, todo este andar y como se logró arribar a reforma tan importante como la “Ley 3 de 3 contra la Violencia de Género” que fue probada el 24 de mayo de 2023, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al realizar la declaratoria de reforma, entre ellos al artículo 38 fracción VII de la Constitución Política, es

decir, la “Ley 3 de 3” contra la violencia”, luego de que 23 congresos estatales respaldaran los cambios. A saber, de los votos aprobatorios, fueron de los congresos siguientes: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

2. Conceptos que orbitan alrededor de la VPCMRG.

Es importante precisar que para poder comprender la VPCMRG, se debe exponer los principales conceptos que la rodean y que, aunque parecieran ser los mismos, no implican los mismos efectos ni generan en su entorno las mismas consecuencias.

¿Qué es la violencia?

Es el uso intencional de la fuerza física y/o amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte, esto acorde a la definición que le otorga la Organización Mundial de la Salud (OMS).¹

¿Qué es la violencia contra las mujeres?

Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.²

¿Qué es la violencia política?

¹ Organización Mundial de la Salud, Temas de salud, Violencia. Consultable en <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>

² Artículo 5 fr. IV, de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Todo acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, así como de proferir expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidatos y candidatas.³

¿Qué se entiende por género?

Es el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se construyen los conceptos de “masculinidad” y “feminidad”, los cuales determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valoración y las relaciones entre mujeres y hombres.⁴

Refiere a las características, roles, expectativas, espacios, jerarquías, permisos y prohibiciones a mujeres y hombres, dentro de la sociedad. Esta distinción es una construcción social y cultural que restringe las posibilidades y el desarrollo pleno de capacidades de las personas.

La utilización del género, como justificación para la supremacía masculina reproduce condiciones de injusticia y desigualdad; es importante reconocer que, al ser el género un constructo social está en posibilidades de modificarse a favor de la igualdad entre personas.⁵

¿Qué es la identidad de género?

De acuerdo con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género⁶, define a la identidad de género como la internalización de lo que es aceptado y lo que está prohibido para las mujeres y para los hombres con relación a la forma de comportarse y expresarse, sus aspiraciones y alcances. Determina la auto-percepción y,

³ Tesis XXIII/2008. Propaganda política y electoral. No debe contener expresiones que induzcan a la violencia (legislación del estado de Tamaulipas y similares).

⁴ http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100904.pdf, P. 71.

⁵ <https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/genero>

⁶ [C1_Protocolo_Atención_Violencia_8oct2019.indd](#)

más importante aún, la auto-valoración, así como la forma que se percibe y valora a las personas del mismo sexo y del sexo opuesto.

¿Qué es la violencia de género?

Es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico patrimonial o económico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.

¿Qué es la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género?

De acuerdo al artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia⁷, la define como: toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella.

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

⁷ [Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia \(diputados.gob.mx\)](http://leyes.diputados.gob.mx)

3. La Violencia Política contra las Mujeres en razón de género.

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más presente en el mundo, que se manifiesta en diversos ámbitos de la vida social, laboral y política, tanto en escenarios públicos como privados (ONU Mujeres 2015). Esta violencia, más que acciones individuales o al azar, está arraigada en estructuras sociales y trasciende a la edad, estatus socioeconómico y nivel educativo.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém Do Pará”, fue firmada en el XXIV Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994, en Belém Do Pará, Brasil, la cual fue suscrita por México en 1995 y ratificada en 1998 (SRE 2008)

La citada convención define en su primer artículo que *“la violencia contra la mujer debe entenderse como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”*

En su artículo 7, señala que los Estados parte convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y llevar a cabo lo siguiente:

“Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;

Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;

Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;

Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;

Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces, y

Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.”

Como se advierte la Convención de Belém Do Pará, es uno de los principales instrumentos de derechos humanos de las mujeres a fin de prevenir, sancionar y eliminar la violencia, basada en su género.

En esta misma tesitura, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide que éstas gocen de sus derechos fundamentales, y este tipo de violencia se clasifica como violencia basada en el género, ya que está motivada por la estructura de discriminación y la cultura de subordinación y dominio patriarcal sobre las mujeres por el simple hecho de serlo. La violencia basada en el género también es ejercida contra lesbianas, bisexuales, personas transexuales, transgénero, intersexuales e incluso entre varones que no cumplen con el mandato de masculinidad hegemónica.

Actualmente las mujeres están en las aulas universitarias, votan, eligen y son postuladas y designadas en cargos políticos, desempeñándose en puestos tanto del sector público

como privado. **No obstante, la realidad es que todavía tienen que librar muchas batallas, una de ella es el fenómeno de resistencia hacia la actividad política, es decir, la violencia política por el solo hecho de ser “mujer”.**

Como se ha venido mencionado, intrínsecamente la violencia contra las mujeres tiene su origen en las relaciones de desigualdad de poder, resultante de las estructuras culturales e históricas del patriarcado; por ello es vital reconocerla y erradicarla ya que es una de las expresiones más extremas de violación a los derechos humanos de las mujeres, por lo que no podemos concebir que existe igualdad, si ello implica un costo, si ello, implica sufrir VPCMRG.

Cabe mencionar, que la violencia contra las mujeres no distingue etnia, clase, religión o edad, sino esta se basa en el solo hecho de ser mujer, no sin obviar que esta violencia se puede reforzar, si la mujer cuenta alguna otra característica, como ser indígena, joven, o tener alguna preferencia sexual diferente, entre otras. Esto hace incluso que la violencia o la discriminación se recrudezca.

Esta violencia de género, puede manifestarse en múltiples acciones, tales como humillaciones, persecución, prohibiciones, aislamiento, control o cualquier otra acción que impida que las mujeres gocen de sus derechos y libertades, por ello han tenido que emerger en la legislación mexicana, leyes que buscan eliminar la violencia contra las mujeres.

Como ya se ha mencionado líneas arriba, el artículo 20 Bis, define a la VPCRG⁸, como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada.

En esta tesitura y de acuerdo con la experiencia vivida en los procesos electorales nacionales y locales, las candidatas sufren innumerables actos de violencia política por razón de género y uno de los momentos cuando más se agravaba ese fenómeno, es durante las campañas electorales, y no se acaba, ya que continua en el ejercicio de su encargo.

⁸ <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf>

4. Iniciativa de la 3 de 3 contra la Violencia de Género.

La propuesta de la “3 de 3 contra la violencia de género” tiene su origen en la agenda feminista de la sociedad civil, que como es conocido, fue por iniciativa del grupo “Las Constituyentes CDMX” con el respaldo de legisladoras y servidoras públicas a nivel federal y local, así como de activistas y ciudadanas de diversas entidades federativas, con el claro objetivo de establecer mecanismos para impedir que personas generadoras de violencia familiar o doméstica, violencia sexual o que incumplan con sus obligaciones alimentarias, y que se registraran a una candidatura de elección popular en el Proceso Electoral 2020-2021.

Así el 19 de octubre del año 2020, las **Constituyentes CDMX** y la Cámara de Diputados, dirigieron al INE **un escrito**, apoyado por diversas legisladoras del ámbito federal, local, regidoras, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos y ciudadanas de las entidades federativas del país, para solicitar la inclusión de un mecanismo que velara por la implementación de una propuesta denominada 3 de 3 contra la violencia, consistente en que las y los aspirantes a una candidatura no debían encontrarse en alguno de los siguientes supuestos:

1. **No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento** y en su caso no haber sido condenado o sancionado mediante **Resolución firme** por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.
2. **No contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento** y en su caso no haber sido condenado, o sancionado mediante **Resolución firme** por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y;
3. **No estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario o moroso** que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así corresponda.

Como se advierte fueron las mujeres de la sociedad civil y de otras más mujeres funcionarias publicas quienes apoyaron e impulsaron esta propuesta. Cabe destacar que estas luchas hoy han traído innumerables cambios, ahora bien, ¿esta solicitud hubiera prosperado de solo haber hombres en el espacio público o en las instituciones electorales?

Ante esta petición el INE, el 28 de octubre de 2020 aprobó el Acuerdo INE/CG517/2020⁹ por el que se emitieron los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.

Y en su artículo 32, se estableció exigir a cada persona aspirante a una candidatura, firmará un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde manifestará que no ha sido condenada, o sancionada mediante Resolución firme como:

1. Deudor alimentario moroso
2. No ser acosador sexual, y
3. No ser agresor por razones de género

Así es como surge el formato 3 de 3 que fue aplicado a nivel nacional y en los estados, durante las elecciones del proceso electoral 2020-2021.

5. Reforma a la Constitución Federal sobre la “Ley 3 de 3 contra la violencia de género”

Ahora bien, como llega la Ley 3 de 3 contra la Violencia, a nuestra Constitución, y para darles un contexto general es el siguiente:

- En el mes de abril de 2023, fue aprobado por el **Poder Legislativo Federal**, la **declaratoria de la reforma a los artículos 38 fracción VII y 102 de la Constitución**

⁹ <https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115101/CGor202010-28-ap-9-Gaceta.pdf>

Política, el primero de ellos en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, conocida como “Ley 3 de 3” contra la violencia”:

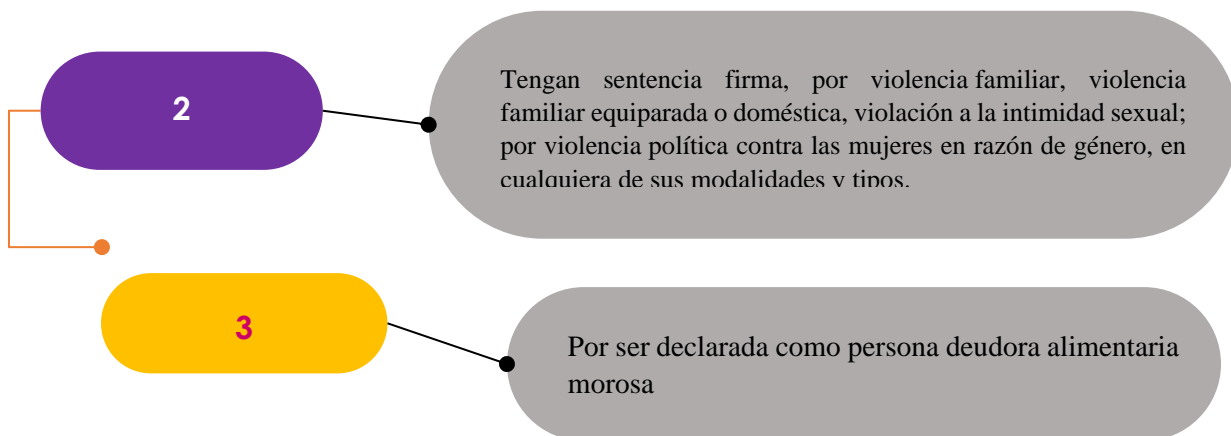
- Cabe precisar que el 28 de abril de 2023, fue aprobada la declaratoria constitucional, por el **Senado de la República (Senado)**. En consecuencia, el Senado remitió a las **legislaturas locales** para su respectivo análisis y aprobación de conformidad con el artículo 135 de la Constitucional, el cual señala que, para ser reformada o adicionada la Constitución Federal, se requiere que sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.
- El 24 de mayo de 2023, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de aprobación de la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, es decir, la “**Ley 3 de 3” contra la violencia**”, luego de que 23 congresos estatales respaldaran los cambios.

A saber, de los votos aprobatorios, fueron de los congresos siguientes: ***Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.***

- El 29 de mayo de 2023, es publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, el **DECRETO** por el que se reforman y adicionan los artículos 38 y 102 de la Constitución, estableciendo en su artículo 38, fracción VII constitucional, que se **SUPENDEN LOS DERECHOS** para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a personas que:

1

Tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo



Asimismo, en el **SEGUNDO TRANSITORIO**, del decreto de reforma se estableció lo siguiente:

“Segundo. Dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor, el Congreso de la Unión y la Legislaturas de las Entidades Federativas, deberán ajustar sus constituciones y demás legislación que sea necesaria, a fin de dar cumplimiento al presente Decreto”

¿Qué implica esta reforma?:

En este tenor, tenemos que esta reforma representa un avance muy importante para nuestro país, pero sobre todo para erradicar la Violencia contra las Mujeres, por eso, puedo decir, que a partir de ahora que debemos esperar:

- Que haya cero espacios en el poder público a quienes sean violentadores de mujeres y de las infancias.
- Que exista co-responsabilidad y compromiso social
- Que se aproxime una reconstrucción social
- Y que aparezca el **Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias**. Cuyo registro, también adquirió vida a partir de la reforma también dada el 08 de mayo de 2023, a la LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN MATERIA DE PENSIONES ALIMENTICIAS.

Es este sentido, la reforma es un candado para que cualquier persona que aspire a ocupar algún cargo público por DESIGNACIÓN o ELECCIÓN POPULAR, no pueda participar al encontrarse suspendidos sus derechos y prerrogativas ya declarados constitucionales en la fracción VII, que se adiciona al artículo 38 constitucional.

¿Qué urge?

Sin embargo, esta reforma también representa varios desafíos y aspectos urgentes que deben atenderse, y el primero de ellos, es:

- De conformidad con lo establecido en el numeral 105 de la Constitución Federal, todas las **reformas en materia electoral, deben publicarse 90 días antes del arranque de los procesos electorales, en esa tesitura, al estar de cara al Proceso 2023-2024**, tenemos que en algunos estados los procesos electorales locales arrancarán en el mes de septiembre, siendo la fecha fatal: siendo la fecha fatal: ¡INICIOS DE JUNIO!, y para los que comienzan en OCTUBRE A INICIOS DE JULIO.

Previsiones

En este tenor, y toda vez que entró en vigor del Decreto de la Ley 3 de 3 -el 30 de mayo de 2023-, las Legislaturas de los estados tendrán 180 días para ajustar su marco normativo a fin de dar cumplimiento con lo establecido, **es decir, a más tardar el 26 de noviembre del año en curso.**

En este sentido, de no armonizarse estas reformas en las legislaturas de los estados, será muy importante que las autoridades, como en el caso del Instituto Electoral, se lleven a cabo convenios de colaboración y emitan los lineamientos respectivos por la autoridad electoral, para establecer la forma que habrá de materializar esta reforma en el proceso electoral 2023-

2024, toda vez que con independencia de si se ajusta o no por las legislaturas de los estados, se debe cumplir esta reforma al estar contenida en la constitución.

NOTA: Cabe preciar que algunos OPLEs, ya han celebrado convenios de colaboración con el Poder Judicial de su Estado, para colaborar en la integración, registro y actualización del “Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de VPCMRG”, con el fin de hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido sancionadas por tal conducta; así como para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38, fracción VII, de la Constitución Federal, en lo relativo a la suspensión de derechos de la ciudadanía para ocupar un cargo de elección popular en el supuesto de que sean condenadas mediante sentencia firme por la comisión intencional de los delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; así como por ser declaradas deudores alimentarios morosos.

Desafío de la Temporalidad

Es importante tener en cuenta, que la suspensión no establece un plazo específico para que quienes se encuentran en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 38 fracción VII Constitucional, puedan participar para un cargo de elección popular o designación.

Ya que al no prever una temporalidad específica para que quienes se encuentren en tal circunstancia ya que refiere: “Por tener sentencia firme o por haber sido declarado deudor alimentario”, ocupar algún cargo de elección popular o de designación, aún y cuando haya transcurrido ya un tiempo considerable y hayan cumplido su pena, lo que podría constituir una restricción absoluta al ejercicio de un derecho humano; situación en la que se debe poner especial cuidado, ya que dicha omisión podría tener como consecuencia la presentación de algún medio de impugnación en el que se resuelva declarar su inconstitucionalidad.

Los partidos políticos para garantizar la “3 de 3”

Asimismo, algo más que he detectado, es que con esta reforma los partidos juegan un papel fundamental para que se cumpla la misma, ya que se debe considerar cuál será la consecuencia cuando una persona manifiesta bajo protesta de decir verdad que no tiene antecedentes y en realidad se descubre que, si los tiene, que sanción o consecuencias podría acarrear, qué vaya más allá de negarle el registro, y esto lo van enfrentar los partidos en una elección interna así como las institucional al momento de registro de candidaturas.

Asimismo, los partidos deberán definir cuáles serán los mecanismos con que deberán contar los partidos políticos para verificar su cumplimiento que sus aspirantes a candidaturas no se encuentren en estos supuestos.

Autoridades jurisdiccionales

También como instituciones electorales y jurisdiccionales, veremos importantes desafíos:

El primero de ellos, es que para que sea eficaz y se pueda materializar la ley 3 de 3, será vital mantener actualizado el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por casos de VPRG, a fin tener certeza de que este cuenta con información veraz y oportuna (esta información útil a los partidos en sus elecciones internas)

El segundo, es que se debe fortalecer la comunicación y coordinación con las diversas autoridades para celebrar convenios de colaboración, como con el Poder Judicial de su Estado, para colaborar en la integración, registro y actualización del “Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de VPG” y datos sobre deudores alimentarios, con el fin de hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido sancionadas por tal conducta; así como para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38, fracción VII, de la Constitución Federal.

Y finalmente, será importante que las instituciones electorales en la tramitación de las quejas o denuncias por VPG y jurisdiccionales en la resolución respectiva, reduzcan los tiempos de

respuesta para que dichas resoluciones sirvan como antecedentes para las respectivas inscripciones en el registro.